

CONTESTACIÓN LLAMAMIENTO EN GARANTÍA - 76001310500820240013700

jhovany florez <ej.juridico@hotmail.com>

Mié 31/07/2024 12:19 PM

Para: Juzgado 08 Laboral Circuito - Valle del Cauca - Cali <j08lccali@cendoj.ramajudicial.gov.co>

CC: sandrapalaciosut@gmail.com <SANDRAPALACIOSUT@GMAIL.COM>

 1 archivos adjuntos (549 KB)

CONTESTACION - LLAMAMIENTO GARANTIA - FRANCY GALINDO PINZON.pdf;

JUEZ 08 LABORAL DEL CIRCUITO DE CALI.

E. S. D.

REF: ORDINARIO

RAD: 76001310500820240013700

DEMANDANTE: FRANCY GALINDO PINZON. C.C. 51739850

DDO: ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES PORVENIR S.A.

LLAMADO EN GARANTÍA: ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES.

ASUNTO: CONTESTACIÓN LLAMAMIENTO EN GARANTÍA REALIZADO POR ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES PORVENIR S.A.

EDWIN JHOVANY FLOREZ DE LA CRUZ, mayor de edad y vecino de Cali, identificado con cedula de ciudadanía N° 1.130.631.691 de Cali, Abogado en ejercicio portador de la Tarjeta Profesional N° 309.223 del Consejo Superior de la Judicatura, obrando en calidad de apoderado judicial de la demandada ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES, me permito dar respuesta al llamamiento en garantía realizado por **ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES PORVENIR S.A.**

**JUEZ 08 LABORAL DEL CIRCUITO DE CALI.
E. S. D.**

**REF: ORDINARIO
RAD: 76001310500820240013700
DEMANDANTE: FRANCY GALINDO PINZON. C.C. 51739850**

**DDO: ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES PORVENIR S.A.
LLAMADO EN GARANTÍA: ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE
PENSIONES – COLPENSIONES.**

**ASUNTO: CONTESTACIÓN LLAMAMIENTO EN GARANTÍA REALIZADO POR
ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES PORVENIR S.A.**

EDWIN JHOVANY FLOREZ DE LA CRUZ, mayor de edad y vecino de Cali, identificado con cedula de ciudadanía N° 1.130.631.691 de Cali, Abogado en ejercicio portador de la Tarjeta Profesional N° 309.223 del Consejo Superior de la Judicatura, obrando en calidad de apoderado judicial de la demandada ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES, me permito dar respuesta al llamamiento en garantía realizado por **ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES PORVENIR S.A.** dentro del proceso de la referencia de la siguiente forma:

**NATURALEZA JURIDICA DE LA ENTIDAD DEMANDADA, REPRESENTACIÓN
LEGAL Y DOMICILIO.**

La Administradora Colombiana de Pensiones – COLPENSIONES- es una empresa industrial y comercial del Estado del orden nacional, organizada como entidad financiera de carácter especial, vinculada al Ministerio de Trabajo con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente, cuyo objeto consiste en la administración estatal del régimen de prima media con prestación definida incluyendo la administración de los beneficios económicos periódicos de que trata el Acto Legislativo 01 de 2005 modificadorio del artículo 46 de la Constitución Política, de acuerdo con lo que establezca la ley que lo desarrolle.

La representación legal la ejerce el doctor **JAIME DUSSÁN**, quien obra en su calidad de Presidente, o quien haga sus veces.

El domicilio principal es en la ciudad de Bogotá D.C, en la carrera 10 No.72-33 Torre B piso 11, número telefónico 2170100.

FRENTE A LOS HECHOS DE LA DEMANDA

AL HECHO 1: Es cierto, conforme la documentación aportada con la demanda.

AL HECHO 2: Es cierto, conforme la documentación aportada con la demanda.

AL HECHO 3: Es cierto, conforme la documentación aportada con la demanda.

AL HECHO 4: Falso. Para la fecha de solicitud de traslado, mi representada estaba con todas las facultades para hacerlo y, por el contrario, de haberse negado a aceptar que la aquí demandante se trasladara, habría incurriendo en una violación al derecho a la libre elección que a ella le asistía en su debido momento.

En este sentido, es preciso señalar, habida cuenta de que la aquí demandante ya ostenta la calidad de PENSIONADO por parte de **ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES PORVENIR S.A.**, es su actual fondo el responsable de los perjuicios ocasionados al demandante.

OPOSICIÓN A LAS PRETENSIONES

1. Me opongo a que se imponga la condena solicitada en el presente numeral, toda vez que, para la fecha de solicitud de traslado, mi representada estaba con todas las facultades para hacerlo y, por el contrario, de haberse negado a aceptar que la aquí demandante se trasladara, habría incurriendo en una violación al derecho a la libre elección que a ella le asistía en su debido momento.

En este sentido, es preciso señalar, habida cuenta de que la aquí demandante ya ostenta la calidad de PENSIONADO por parte de **ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES PORVENIR S.A.**, es su actual fondo el responsable de los perjuicios ocasionados al demandante.

Conforme lo anterior, teniendo en cuenta que con los documentos aportados con la demanda, la parte activa no logra si quiera inferir la nulidad de la afiliación, ni el error o vicio alguno del consentimiento que medió, según lo relata el apoderado del fondo privado, debe ser este quien asuma los perjuicios que se puedan haber ocasionado al demandante.

FORMULACIÓN DE EXCEPCIONES:

Como sustento jurídico de la defensa me permito exponer lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley 797 de 2003 que indica:

“(...) e) Los afiliados al Sistema General de Pensiones podrán escoger el régimen de pensiones que prefieran. Una vez efectuada la selección inicial, estos sólo podrán trasladarse de régimen por una sola vez cada cinco (5) años, contados a partir de la selección inicial. Después de un (1) año de la vigencia de la presente ley, el afiliado no podrá trasladarse de régimen cuando le faltaren diez (10) años o menos para cumplir la edad para tener derecho a la pensión de vejez; (...)”

El literal “b” del artículo 13 la Ley 100 de 1993, expresa: *“La selección de uno cualquiera de los regímenes previstos por el artículo anterior es libre y voluntaria por parte del afiliado, quien para tal efecto manifestará por escrito su elección al momento de la vinculación o del traslado. El empleador o cualquier persona natural o jurídica que desconozca este derecho en cualquier forma, se hará acreedor a las sanciones de que trata el inciso 1o. del artículo 271 de la presente ley.”*

Ahora bien, la Sra. FRANCY GALINDO PINZON pretende que se CONDENE a la sociedad **PORVENIR S.A.**, al pago de la indemnización plena de perjuicios por el traslado efectuado del Régimen de Prima Media con Prestación Definida al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad.

Adentrándonos en el caso objeto de estudio, nos damos cuenta que esta pretensión no son en contra de mi representada ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES, puesto que todas las pretensiones subsidiarias van encaminadas a condenar al pago de perjuicios ocasionados por parte de **PORVENIR S.A. PENSIONES Y CESANTIAS**, y mi representada no tiene injerencia alguna en dicha relación contractual.

Tengamos en cuenta que al momento en que el aquí demandante se trasladó de régimen pensional, este estaba en pleno derecho de hacerlo y/o solicitarlo, lo cual indica un procedimiento acorde a la ley por parte de mi representada, y para la fecha de solicitud de traslado, mi representada estaba con todas las facultades para hacerlo, por el contrario, de haberse negado a aceptar que el aquí demandante se trasladara, habría incurriendo en una violación al derecho a la libre elección que a ella le asistía en su debido momento.

De acuerdo a lo anterior, podemos concluir que COLPENSIONES no se encuentra vulnerando derecho fundamental alguno, evidenciándose claramente una falta de legitimación en la causa por pasiva ante mi representada, pues no está llamada a contradecir las pretensiones subsidiarias de la demanda, ya que, como administradora de los recursos del régimen de prima media con prestación definida, no está dentro de sus competencias declarar o intervenir en relaciones laborales o contractuales diferentes a las propias.

Además, cabe resaltar que anteriormente, si la persona ostentaba o no el estatus de pensionado, la Corte Suprema de Justicia en las sentencias 31989 de 2008 y 31314 del mismo año, sentó un precedente mediante el cual, cuando se estaba frente a la acreditación de una omisión en el deber de información y de buen consejo por parte de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) en el momento del traslado de régimen pensional de un afiliado, el efecto era la declaratoria de la ineficacia del traslado realizado, y tenía como consecuencia que, las AFP fueran condenadas a la transferencia de los aportes y rendimientos a COLPENSIONES, quien así mismo debía reconocer a los demandantes (pensionados o activos cotizantes) su pensión de vejez; Ahora, a partir de la sentencia SL373-2021 del 10 de febrero de 2021 de la Corte Suprema de Justicia, Sala Laboral, adujo que, si ya se encuentra pensionado, no es posible trasladarse de Fondo Privado a Colpensiones, pues el cambio que trajo consigo esta sentencia frente a la ineficacia de traslado de régimen pensional, significa que, respecto de las personas que ya se encuentran pensionadas, no será posible declarar la ineficacia del traslado, y por ende, no les será posible el retorno a Colpensiones para que dicha entidad sea la encargada de reconocerles su pensión de vejez.

Esto se decidió así, pues, afirma la Corte que al ser la calidad de pensionado una situación jurídica consolidada, no es razonable revertir o retrotraer los efectos de esta sin que genere disfuncionalidades que afectan a múltiples personas, entidades, actos, relaciones jurídicas, además de generar un daño a “los derechos y obligaciones de terceros y del sistema en conjunto”.

Con lo anterior, podemos concluir que COLPENSIONES no ha incurrido en alguna ilegalidad que pueda generar algún perjuicio al demandante.

Resalto, no se cumplen los requisitos del Art. 64 del Código General del Proceso, pues como se dijo con anterioridad, al demandante ostentar la calidad de pensionado, está claramente es una situación jurídica consolidada, y el llamado a responder por los perjuicios que se puedan ocasionar al demandante, sería el fondo que lo traslado del RPM al RAIS **PORVENIR S.A. PENSIONES Y CESANTIAS**, pues actualmente no existe una relación contractual entre el llamante y el llamado.

Ahora, el artículo 1502 del Código Civil, dice que para que una persona se obligue a otra por un acto o declaración de voluntad, es necesario que consienta en dicho acto o declaración de voluntad y su consentimiento no adolezca de vicios.

Vicios del Consentimiento. Para la validez de un acto jurídico es necesaria la manifestación de la voluntad del agente o agentes que intervienen en su declaración; pero para su validez de dicho acto es indispensable que dicha voluntad

sea sana, es decir, que no adolezca de vicios pues su presencia destruye la libertad y la conciencia que la ley presupone en el agente o agentes al reconocerles poder suficiente para crear, modificar o extinguir relaciones jurídicas. El artículo 1508 del Código Civil dispone que los vicios del consentimiento son: el error, la fuerza y el dolo.

De igual manera, dentro de un acuerdo de voluntades se presume la buena fe de las partes intervinientes, por lo que, en determinado momento, quien alegue que se vició su consentimiento, deberá probarlo.

Los vicios de consentimiento que pueden afectar las declaraciones de la voluntad no se presumen, sino que deben acreditarse plenamente dentro del respectivo proceso judicial.

En el desarrollo de la jurisprudencia, la Corte Suprema de Justicia Sala Laboral, esclareció que es la persona que indica que una actuación, documentos o declaración están viciados en el consentimiento por el error, la fuerza o el dolo consagrados en los artículos 1508 a 1516 del Código Civil, quien tiene el deber de demostrar y acreditar probatoriamente lo que acusa, esto es, que actuó bajo presión. (Corte Suprema de Justicia Sala Laboral, Sentencia SL132022015 (47028), Sep. 09/15)

De igual forma, no está obligada mi representada la Administradora Colombiana de Pensiones- COLPENSIONES, a reconocer el derecho pretendido por la accionante, toda vez que el traslado de la señora **FRANCY GALINDO PINZON**, se realizó en su momento al Régimen de Ahorro Individual, de forma libre, voluntaria y sin presiones.

Hay que tener en cuenta que solamente hasta el año 2024, esto es, más de 20 años después de haberse dado el traslado de régimen, la demandante pretende responsabilizar a la ADMINISTRADORA de su decisión, pues con sus propios actos demostró, que esta fue de manera libre y voluntaria.

En conclusión, el acto jurídico atacado no adoleció de ningún vicio del consentimiento para contraer obligaciones, pues no ha demostrado que se encuentre en algún grado de interdicción que le impidiera consiente y válidamente tomar la decisión que tomó.

Por último, Es importante señalar que COLPENSIONES administra un patrimonio de los asegurados que tiene la obligación de vigilar, esta razón hace que tenga que ser cauto y cuidadoso al reconocer una prestación y sólo debe hacerlo cuando

exista absoluta certeza del cumplimiento de los requisitos por parte de los beneficiarios. Disponer de estos dineros reconociendo y pagando prestaciones sin bases legales o certeza absoluta sobre el derecho de los beneficiarios, conlleva a cometer un delito que obviamente pueden asumir los funcionarios como personas naturales, y el ente como persona jurídica. Ello demuestra la buena fe de su actuar.

EXCEPCIONES DE FONDO O PERENTORIAS

1.-. - FALTA DE LEGITIMACION EN LA CAUSA POR PASIVA: El llamante **ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES PORVENIR S.A.**, manifiesta y basa el libelo introductorio en el deber de informar que recaía sobre la **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES**. Recordemos que, para la fecha de solicitud de traslado, mi representada estaba con todas las facultades para hacerlo y, por el contrario, de haberse negado a aceptar que la aquí demandante se trasladara, habría incurriendo en una violación al derecho a la libre elección que a ella le asistía en su debido momento. En este sentido, es preciso señalar, habida cuenta de que la aquí demandante ya ostenta la calidad de **PENSIONADO** por parte de **ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES PORVENIR S.A.**, que este ya no es responsabilidad del fondo que represento.

Respecto de la falta de legitimación, la Corte Constitucional, ha manifestado que:

“La legitimación en la causa es una calidad subjetiva de las partes en relación con el interés sustancial que se discute en el proceso. Por tanto, cuando una parte carecen de dicha calidad o atributo, no puede el Juez adoptar una decisión de mérito y debe entonces simplemente declararse inhibido por fallar el caso de fondo. La legitimación pasiva se consagra como la facultad procesal que le atribuye al demandado la posibilidad de desconocer o controvertir la reclamación que el actor le dirige mediante la demanda sobre una pretensión de contenido material”.

La legitimación en la causa por pasiva.

Con relación con la naturaleza jurídica de la noción de legitimación en la causa, en sentido amplio, la jurisprudencia constitucional se ha referido a ella, como la “calidad subjetiva reconocida a las partes en relación con el interés sustancial que se discute en el proceso”, (Corte Constitucional. Sentencia C-965 de 2003.) De forma tal, que cuando una de las partes carece de dicha calidad o condición, no puede el juez adoptar una decisión favorable a las

pretensiones demandadas. Consejo de Estado, sentencia de 25 de julio de 2011, expediente: 20.146.

Entendido así el concepto de legitimación en la causa, es evidente que cuando ella falte, bien en el demandante o bien en el demandado, la sentencia no puede ser inhibitoria, si no desestimatoria de las pretensiones aducidas, pues querrá decir que quien las adujo o la persona contra las que se adujeron no eran titulares del derecho o de la obligación correlativa alegada.”

2-. INEXISTENCIA DE LA OBLIGACION.

No se cumplen los requisitos del Art. 64 del Código General del Proceso, pues como se dijo con anterioridad, al demandante ostentar la calidad de pensionado, está claramente es una situación jurídica consolidada, y el llamado a responder por los perjuicios que se puedan ocasionar al demandante, sería su fondo actual ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS PORVENIR S.A., pues actualmente no existe una relación contractual entre el llamante y el llamado.

Ahora, el artículo 1502 del Código Civil, dice que para que una persona se obligue a otra por un acto o declaración de voluntad, es necesario que consienta en dicho acto o declaración de voluntad y su consentimiento no adolezca de vicios.

Vicios del Consentimiento. Para la validez de un acto jurídico es necesaria la manifestación de la voluntad del agente o agentes que intervienen en su declaración; pero para su validez de dicho acto es indispensable que dicha voluntad sea sana, es decir, que no adolezca de vicios pues su presencia destruye la libertad y la conciencia que la ley presupone en el agente o agentes al reconocerles poder suficiente para crear, modificar o extinguir relaciones jurídicas. El artículo 1508 del Código Civil dispone que los vicios del consentimiento son: el error, la fuerza y el dolo.

De igual manera, dentro de un acuerdo de voluntades se presume la buena fe de las partes intervinientes, por lo que, en determinado momento, quien alegue que se vició su consentimiento, deberá probarlo.

Los vicios de consentimiento que pueden afectar las declaraciones de la voluntad no se presumen, sino que deben acreditarse plenamente dentro del respectivo proceso judicial.

En el desarrollo de la jurisprudencia, la Corte Suprema de Justicia Sala Laboral, esclareció que es la persona que indica que una actuación, documentos o declaración están viciados en el consentimiento por el error, la fuerza o el dolo consagrados en los artículos 1508 a 1516 del Código Civil, quien tiene el deber de demostrar y acreditar probatoriamente lo que acusa, esto es, que actuó bajo presión. (Corte Suprema de Justicia Sala Laboral, Sentencia SL132022015 (47028), Sep. 09/15)

De igual forma, no está obligada mi representada la Administradora Colombiana de Pensiones- COLPENSIONES, a reconocer el derecho pretendido por la accionante, toda vez que el traslado de la señora **FRANCY GALINDO PINZON**, se realizó en su momento al Régimen de Ahorro Individual, de forma libre, voluntaria y sin presiones.

Hay que tener en cuenta que solamente hasta el año 2023, esto es, más de 15 años después de haberse dado el traslado de régimen, la demandante pretende responsabilizar a la ADMINISTRADORA de su decisión, pues con sus propios actos demostró, que esta fue de manera libre y voluntaria.

En conclusión, el acto jurídico atacado no adoleció de ningún vicio del consentimiento para contraer obligaciones, pues no ha demostrado que se encuentre en algún grado de interdicción que le impidiera consiente y válidamente tomar la decisión que tomó.

De acuerdo a lo anterior no es posible acceder a las pretensiones del llamamiento en garantía.

3. AUSENCIA DE VICIOS EN EL CONSENTIMIENTO DEL TRASLADO:

El traslado conserva incólume su presunción de validez y surte plenamente sus efectos en el mundo jurídico, puesto que no ha sido desvirtuado jurídicamente por la demandante, toda vez que el mismo, no contiene vicio alguno que conlleve a su anulación, ya que fue expedido por la autoridad competente, observando la ritualidad

exigida para su creación y ejecutoria, tanto los motivos en los que se funda, como la motivación que contiene son consistentes y congruentes con las normas superiores que regulan lo concerniente al traslado de régimen pensional, por lo tanto, los vicios que se le imputan carecen de fundamento de acuerdo con los preceptos del ordenamiento jurídico.

4. BUENA FE DE LA ENTIDAD DEMANDADA:

La **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES**, en desarrollo de sus actos, se desempeña dentro de los parámetros legales, siendo responsable y procediendo con lealtad. Las resoluciones proferidas por la **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES**, son producto del estudio llevado a cabo por funcionarios idóneos y fundados en derecho.

5.- PRESCRIPCIÓN TRIENAL:

Solicito respetuosamente al Sr. Juez, se declare la prescripción tanto de la acción laboral como de los derechos sustanciales que pudieren verse afectados por dicho fenómeno, si a ello hubiere lugar, sin que la proposición de ésta excepción implique reconocimiento expreso o tácito de la existencia de los derechos reclamados por vía del presente proceso ordinario laboral.

Respecto de la figura de la prescripción trienal, ha dicho la Honorable Corte Constitucional, en sentencia C – 072 de 1994 sentencia de 23 de febrero de 1994 Magistrado Ponente VLADIMIRO NARANJO MESA. *“La prescripción extintiva es un medio de extinguir acción referente a una pretensión concreta, derecho, pero no el derecho sustancial fundamental protegido por el artículo 25 de la C.P., porque el derecho al trabajo es en sí imprescriptible.”*

No se lesiona al trabajador por el hecho de que la ley fije términos para el ejercicio de la acción Laboral. El derecho de los trabajadores se respeta, simplemente se limita el ejercicio de la acción, y se le da un término razonable para ello. El núcleo esencial del derecho al trabajo no sólo está incólume, sino protegido, ya que la prescripción de corto plazo, en estos eventos, busca mayor prontitud en el ejercicio de la acción, dada la supremacía del derecho fundamental, el cual comporta la exigencia de acción y protección oportunas. Así, pues, el legislador no hizo cosa distinta a hacer oportuna la acción; de ahí lo que, en estricto sentido, prescribe es la viabilidad de una acción concreta derivada de la relación laboral, pero nunca derecho-deber del trabajo.

La prescripción trienal acusada, no contradice los principios mínimos fundamentales establecidos por el Estatuto superior, porque la finalidad que persigue es adecuar a la realidad el sentido mismo de la oportunidad, con lo cual logra que no se desvanezca el principio de la inmediatez, que, obviamente, favorece al trabajador, por ser la parte más necesitada en la relación laboral. El derecho de los trabajadores

no puede menoscabarse (art. 53 C.P.), Y es en virtud de ello que la prescripción de corto plazo garantiza la oportunidad a que tienen derecho los que viven de su trabajo”.

6.- PRESCRIPCIÓN DE LA ACCION

Frente a la contabilización del término de prescripción para impetrar la acción de nulidad de ineficacia de traslado de fondo, se debe tener en cuenta lo dispuesto en la sentencia STL1366-2017, radicación No. 46004 del 07 de febrero de 2017, Magistrado Ponente JORGE MAURICIO BURGOS RUIZ, a través de la cual la Honorable Corte Suprema de Justicia decidió sobre la acción de tutela impetrada por la señora SONIA REMOLINA PEREZ contra la SALA LABORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE BUCARAMANGA y el JUZGADO PRIMERO LABORAL DEL CIRCUITO de igual ciudad, y al respecto manifestó:

“Cree el petente vulnerados sus derechos fundamentales invocados, al haber el tribunal cuestionado confirmado la decisión del juez de primer grado por medio de la cual no accedió a las pretensiones de la demanda al considerar que «ha operado el fenómeno prescriptivo, por remisión del artículo 145 Código Procesal del Trabajo y Seguridad Social, es viable lo enmarcado en el artículo 1750 del Código Civil».

De las documentales y audios allegados al expediente es claro que, al interior del citado proceso, la parte demandante pretende se deje sin efecto el acto de afiliación al fondo privado ante la omisión de éste de informar de los perjuicios que conducía a la actora la pérdida del régimen de transición en el Sistema de Prima Media con Prestación Definida el cual le era más favorable y por tanto su regreso automático al mismo.

Ahora bien, como fundamento de la solicitud de amparo, señala que su demanda estaba encaminada a establecer la viabilidad de su derecho pensional en el Régimen de Prima Media con Prestación Definida, lo que en su criterio es imprescriptible, por lo que, al no acceder a las pretensiones de la demanda con fundamento en la prescripción, el tribunal cuestionado desconoce los precedentes de esta Sala Laboral en los que se ha declarado la nulidad de la afiliación a los fondos privados.

Así mismo, que erró el tribunal cuestionado en interpretar que lo pretendido por la parte demandante era la acción rescisoria civil al considerar que tiene relación con los elementos del contrato en especial el consentimiento y a la cual por tanto aplicó el término de prescripción establecida en el artículo 1750 del C.C., de cuatro años los cuales contó a partir de la fecha de afiliación.

En efecto, se observa que la determinación del juez colegiado de confirmar el proveído del juez de primer grado, tuvo sustento en la interpretación y el análisis dado al caso objeto de estudio, que le permitió concluir que la acción se encuentra prescrita teniendo en cuenta que la actora alega vicios del consentimiento a fin de obtener la nulidad de la afiliación al RAIS, los cuales datan del 12 de abril de 1998, consignando en la decisión que motivó la presentación de esta acción constitucional, las razones que tuvo para tomar tal determinación, así como la interpretación que dio a los hechos y las pruebas del proceso, sin que en la misma se advierta una actuación subjetiva y arbitraria del tribunal, independientemente de que se esté de acuerdo o no con ésta.

Así las cosas, para llegar a tal determinación, el tribunal cuestionado comenzó por manifestar que «de otro lado, la única inconformidad planteada con el recurso fue la declaratoria de prescripción de la acción impetrada en procura de obtener la declaratoria de ineficacia del traslado de la actora que hizo el 12 de abril de 1998 del régimen de prima media con prestación definida al régimen de ahorro individual con solidaridad, de manera que en virtud del principio de consonancia (...) solo a ese aspecto se contraerá la sala para resolver la apelación y en ese orden de ideas es incuestionable la consideración del a quo en cuanto estimó que dicho traslado era ineficaz, pero no podía ser declarado por haber transcurrido más de cuatro años desde el referido traslado hasta la petición de la nulidad, término que tuvo en cuenta porque consideró el traslado como (...) un negocio jurídico en el cual se expresó la voluntad, para lograrlo. Tampoco es dable por la misma razón del principio de consonancia, estudiar la naturaleza de la decisión de trasladarse del régimen de prima media al RAIS el 12 de abril de 1998 como se ha dicho inmediatamente antes, que tomó la demandante y que el juzgado señaló como un acto de voluntad, para que vicios del consentimiento quiera exención, son los previstos en la ley sustantiva civil, de manera que la acción rescisoria para perseguir la nulidad de tal acto por algún vicio de

consentimiento en cuanto a la prescripción, se sigue por el artículo 1750 del Código Civil que dispone “el plazo para pedir la rescisión durará cuatro años, este cuatreño se contará en el caso de violencia desde el día en que esta hubiere cesado y en el caso de error o de dolo, desde el día de la celebración del acto o contrato”.

Para finalmente concluir el despacho accionado que, «de manera que siendo incuestionable que el traslado cuya ineficacia se pretendió se produjo el 12 de abril de 1998, la prescripción de la acción impetrada para anularla alegando error por vicio en el consentimiento en la toma de esa decisión, prescribió el 12 de abril de 2002, es decir que para la fecha en que la demandante solicitó su regreso al régimen de prima media o en el que impetró la nulidad de ineficacia de ese traslado, lo hizo en octubre de 2013, no interrumpió el término de la prescripción que ya estaba consolidado. Si en gracia de discusión se entendiera que lo que se discute en el proceso es una controversia, entre una usuaria del sistema general de seguridad social y la entidad administradora del fondo de pensiones y por ello, para la prescripción se aplicaran las normas del Código Procesal del Trabajo y el Código Sustantivo del Trabajo que regulan de manera expresa el término para prescribir las acciones emanadas de los derechos sociales, ese término que allí se señala es de tres años, pues con mayor razón estaría entonces vencido el término para impetrar la acción que se intentó con este proceso».

De conformidad con lo anterior, se encuentra la decisión atacada arraigada en argumentos que consultaron reglas mínimas de razonabilidad jurídica y que, sin lugar a dudas, obedecieron a la labor hermenéutica propia del juez, sin que sea dable entonces a la parte actora recurrir al uso de este mecanismo preferente y sumario, como si se tratase de una tercera instancia a la cual pueden acudir los administrados a efectos de debatir de nuevo sus tesis jurídicas y probatorias sobre un determinado asunto, que en su momento fue sometido a los ritos propios de una actuación judicial, con el único fin de conseguir el resultado procesal que le fue esquivo en su oportunidad legal.

Las anteriores razones son suficientes para denegar la protección solicitada.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

PRIMERO: NEGAR el amparo de los derechos fundamentales suplicados por **SONIA REMOLINA PÉREZ** contra la **SALA LABORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BUCARAMANGA** y el **JUZGADO PRIMERO LABORAL DEL CIRCUITO** de igual ciudad.”

De conformidad con el precedente judicial descrito, en el presente caso se puede observar en los hechos de la demanda y los documentos aportados con esta, que el señor **FRANCY GALINDO PINZON**, cotizó al Instituto de seguro social I.S.S hoy COLPENSIONES hasta el momento en que efectuó su traslado voluntario a **COLFONDOS S.A.**, concluyéndose de esta manera que ha operado el fenómeno de la prescripción de la acción como lo dilucida la Honorable Corte Suprema de Justicia en la providencia antes mencionada.

7. INOPONIBILIDAD POR SER TERCERO DE BUENA FE - INOPONIBILIDAD DE LA RESPONSABILIDAD DE LA AFP ANTE COLPENSIONES.

Entendida la inoponibilidad (mecanismo protector), como la ineficacia de un acto o la ineficacia de una nulidad frente a terceros. Es decir, que la ineficacia o nulidad, resultaría inoponible frente a terceros de buena fe como en este caso Colpensiones, a la par que la figura de la inoponibilidad constituye un mecanismo protector del derecho a la seguridad jurídica, que en el caso de Colpensiones se consolida por el tiempo en que aquellos afiliados permanecieron en el RAIS, aunado a que la seguridad jurídica que se deriva de la inoponibilidad pretende proteger intereses patrimoniales de terceros, que en este caso, tienen alcance frente al principio de sostenibilidad financiera del sistema y planeación de la reserva pensional.

De la misma manera, la Sala de Casación Civil, ha definido la inoponibilidad como aquella que “valora la confianza razonable de los terceros de buena fe en aquellos negocios que se presentan objetivamente como válidamente celebrados”, raciocinio, que a su vez se deriva del principio de relatividad de los negocios jurídicos, es decir, que solo se producen efectos respecto de quienes voluntariamente participan de aquél.

Precisamente, la jurisprudencia en la especialidad civil, indica que la inoponibilidad no requiere de la validez del negocio jurídico, muy por el contrario, algo que es ineficaz entre las partes (como en este caso la afiliación al RAIS), si se tenga como eficaz frente al tercero de buena fe (en este caso Colpensiones). Así se ha dicho que: “cuyo caso no le interesa que no lo alcancen los efectos de un negocio válido e incontrovertible entre las partes, sino todo lo contrario, esto es que se tenga como válido frente a su calidad de tercero un negocio jurídico que carece de eficacia entre los celebrantes”. Es decir, que la inoponibilidad en este caso frente a un negocio jurídico ineficaz, permite que sus efectos se mantengan ante un tercero de buena fe, o en otras palabras para el caso concreto, que se mantengan los efectos de la afiliación al RAIS frente a Colpensiones, para lo cual, se probará el desmedro patrimonial que sufre la reserva pensional del RPM en caso de resultarle oponible la ineficacia de los traslados irregulares al RAIS.

8. RESPONSABILIDAD SUI GENERIS DE LAS ENTIDADES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Resulta también relevante indicar, que las entidades de Seguridad Social no solo se sujetan a la responsabilidad propia de los contratos de aseguramiento, sino que se ciñen a obligaciones de índole constitucional que trascienden como administradoras de un servicio público de seguridad social. En este caso, la responsabilidad de las AFP por la ineficacia de un traslado, no sólo se deben enmarcar a reparar el daño individualmente sometido a consideración de un Juez, sino que debe tener alcance frente a los daños indirectos que irradian o comprometen los derechos constitucionales de terceros, en razón de la reserva patrimonial de los pensionados y afiliados del RPM que se ven comprometidos con el desmedro que sufre la reserva pensional, y que si bien es cierto, la jurisprudencia ha indicado que al afiliado no le es atribuible y por ende no se le exige la equivalencia económica de los aportes que se devuelven del RAIS al RPM, no es menos cierto, que tal reparo económico lo debe asumir quien ha causado el daño y por virtud de la operancia de la inoponibilidad.

SOLICITUD CONDENA EN COSTAS

Solicito a el señor Juez, en nombre de mi poderdante, que de ser negadas las pretensiones y condenas y probadas las excepciones de la demanda, la parte vencida en juicio, sea condenada al pago de las costas y agencias en derecho a favor de la Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES, conforme al Artículo 365 del C.G.P. Además, en el evento de prosperar parcialmente las

excepciones propuestas solicito respetuosamente señora Juez tenga en cuenta al fallar, el Numeral 5 del art. 365 del Código General del Proceso que dice:

“ARTÍCULO 365. CONDENA EN COSTAS. En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en que haya controversia, la condenación en costas se sujetará a las siguientes reglas:

(...)

5. En caso de que prospere parcialmente la demanda, el juez podrá abstenerse de condenar en costas o pronunciar condena parcial, expresando los fundamentos de su decisión.”

RELACIÓN DE MEDIOS DE PRUEBA Y ANEXOS

Como pruebas de las excepciones desde ahora me permito solicitar se decreten, practiquen y tengan en cuenta en favor de la parte que represento al fallar el presente proceso, las aportadas con la contestación de la demanda.

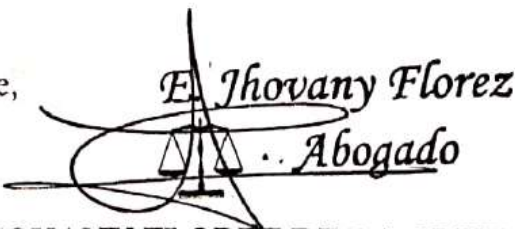
NOTIFICACIONES

Mi representada recibirá notificaciones en la Carrera 1b Oeste # 6 – 38, Oficina 402, Ed. Santa Rosa, (Santa Teresita – Cali). Cel: 318 369 6356 Tel: (602) 343 96 86.

El suscrito recibirá notificaciones en la Secretaría del Despacho a su digno cargo y en mi oficina de Abogado situada en Cali, en la en la carrera 4 # 12 – 41 oficina 1208 edificio Centro Seguros Bolivar.

De la señora Juez,

Atentamente,



Ed Jhovany Florez
Abogado

EDWIN JHOVANY FLOREZ DE LA CRUZ
C.C. 1.130.631.691 DE CALI - VALLE
TP 309.223 del C.S.J.